

Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, por sentencia de diez de junio de dos mil veinticuatro, en los antecedentes RUC 2.300.940.662-K, RIT 136-2024, condenó a Andrés Antonio Calderón Marabolí a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y multa de diez unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, cometido en dicha ciudad el 26 de octubre de 2023.

En contra de dicho fallo, la defensa del sentenciado recurrió de nulidad, arbitrio que se conoció en la audiencia pública de veinticuatro de septiembre pasado, convocándose a los intervinientes a la comunicación de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

**Considerando:**

**Primero:** Que, el recurso se sustenta de manera primordial en la causal de nulidad prevista en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal, argumentando que en este caso se ha infringido el debido proceso, en su aspecto de derecho a un proceso previo legalmente tramitado, conforme con los artículos 6, 7 y 19, N° 3, inciso 6° de la Constitución Política de la República.

Expone que el tribunal conoció de información contenida en un medio de prueba que, si bien fue incorporado en conformidad a la ley, no fue producido de acuerdo con la misma, como exige el artículo 295 del Código Procesal Penal. Lo anterior, debido a que en juicio se dio lectura de un peritaje del Instituto de Salud Pública, sobre pureza y peso neto de la sustancia inculpada, emitido o confeccionado después que el Ministerio Público



comunicase el cierre de investigación en sede de Garantía. A este documento —emitido el 4 de marzo de 2024— se le asignó perito el 28 de febrero de 2024, una vez que el Ministerio Público ya había comunicado el cierre de la investigación, lo que ocurrió en audiencia de 19 de febrero de 2024.

Denuncia que los razonamientos del tribunal para aceptar dicha pericia equivocaron la fecha del documento cuya legalidad se dubitaba, al que individualizaba como fecha de recepción de decomisos del Servicio de Salud del Maule, los días 26 y 20 de octubre de 2023. En este caso, el medio probatorio no fue producido en conformidad a la ley desde que fue emitido, confeccionado o producido después que el Ministerio Público comunicara el cierre de la investigación y con ello se pusiese término al lapso que judicialmente se dispuso para recabar antecedentes en contra del imputado, por lo que solicita invalidar la sentencia y el juicio, y se disponga la realización de un nuevo juicio oral donde se valore de forma negativa la pericia que sindica.

De forma subsidiaria, cimenta su arbitrio en el motivo absoluto de nulidad previsto en el artículo 374, letra e) del código adjetivo, en relación con los artículos 342, letra c) y 297, todos del mismo cuerpo legal, desde que el tribunal del fondo llegó, mediante una valoración apartada de los parámetros de racionalidad que exige el inciso primero de la última de las normas citadas, a una convicción de la existencia del hecho que no corresponde con la conclusión que se habría obtenido de una racional ponderación de la prueba rendida.

Explica que el hecho que se tuvo por establecido en la sentencia fue calificado como constitutivo del delito de tráfico de drogas en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 3º, en relación con el artículo



1º de la Ley N° 20.000. Para lo anterior, el tribunal conoció de información contenida en un medio de prueba que, si bien fue incorporado en conformidad a la ley, no fue producido de acuerdo a la misma, como exige el artículo 295 del Código Procesal Penal; todo, debido a que en juicio se dio lectura a un peritaje del Instituto de Salud Pública, sobre pureza y peso neto de la sustancia debatida, emitido o confeccionado después que el Ministerio Público comunicara el cierre de investigación ante un juez de Garantía. No obstante, este es el núcleo de este reclamo, la valoración realizada por el a quo y que fundamenta en que, su sentencia, adolece de una falta de valoración racional de la prueba rendida, por lo que solicita se declare la nulidad del fallo y la sentencia y se disponga la realización de un nuevo juicio oral, por tribunal no inhabilitado.

**Segundo:** Que, en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público, la sentencia impugnada, en su motivo Octavo, tuvo por acreditado que, *“...en virtud de investigación iniciada por Carabineros, sección OS-7 por denuncia respecto de la posible existencia de tráfico de drogas en el domicilio ubicado en Calle 4 Oriente N° 2918, Población Padre Hurtado, comuna de Talca con participación de una persona apodada ‘El Chuma’ se realizaron diversas diligencias que permitieron vincular a los moradores del inmueble en el delito de tráfico de drogas, siendo uno de éstos Andrés Antonio Calderón Marabolí, alias ‘El Chuma’.*

*En este contexto, el 25 de octubre de 2023, aproximadamente, a las 13:00 horas, una patrulla de la sección de OS-7 de Talca, mantuvo una vigilancia a distancia y discreta, al ya referido inmueble de calle 4 Oriente N° 2.918, observando movimientos característicos de venta de droga y, alrededor de las 14:00 horas de ese mismo día, dos funcionarios policiales, debidamente*



*autorizados para actuar como agentes reveladores, se dirigieron al domicilio investigado y , una vez en el frontis de la vivienda, uno de ellos adquirió de Andrés Antonio Calderón Marabolí, alias 'El Chuma', tres contenedores de pasta base de cocaína, con un peso neto de 0,15 gramos , en la suma \$3.000 pesos.*

*Con fecha 26 de octubre de 2023, aproximadamente a las 16:15 horas, funcionarios de la sección OS-7 de Carabineros con la debida autorización judicial, realizaron una entrada y registro en el domicilio denunciado de calle 4 Oriente N° 2918, Población Padre Hurtado de la comuna de Talca encontrando en el interior de la vivienda a Calderón Marabolí, en el living y a Nanixa Ivania Raimilla Gangas, en el segundo piso. Al ingresar a uno de los dormitorios del segundo piso el personal de carabineros halló, sobre la cama, un trozo de bolsa de nylon color negro, que mantenía pasta base de cocaína, que se encontraba húmeda y en proceso de secado, con un peso neto de 675,9 gramos y, en otro dormitorio del segundo piso, se encontró un trozo de papel blanco y una bolsa de nylon transparente, que contenían en total 7,6gramos netos de marihuana elaborada”.*

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito consumado de tráfico ilícito de drogas estupefacientes o psicotrópicas, descrito y sancionado en el artículo 3º en relación con el artículo 1º, ambos de la Ley N° 20.000.

En torno a lo afirmado en el recurso de nulidad, el mismo fundamento Décimo del fallo impugnado estableció que, “...se ha desestimado la alegación efectuada por el defensor del acusado en cuanto a desechar como prueba los análisis químicos realizados a las drogas incautadas por haber sido incorporadas después del cierre de la investigación. Estos sentenciadores



*hemos concluido que, en la especie, no ha existido una vulneración al debido proceso que haya implicado, realmente, alguna afectación a su derecho de defensa. Por lo demás, de los propios dichos del acusado aparece que, desde el inicio de la investigación, supo la naturaleza de las sustancias cuya posesión se le atribuía, limitándose a negar dicha posesión. Por otra parte, el contenido de la acusación con el señalamiento de la prueba a rendir fue de conocimiento oportuno para el enjuiciado y su apoderado considerando, además, que hubo instancias previas para el cuestionamiento de vicios procesales que causaren perjuicio al derecho de defensa del imputado producto de infracción al debido proceso. Sin embargo, en el presente caso, lo más relevante es el hecho que la defensa no estuvo en condiciones de definir de qué manera, concretamente, se afectó el derecho de defensa del acusado, de qué modo se le perjudicó puesto que no basta establecer la infracción procesal, sino que se debe precisar el fundamento de la causa de pedir, lo que no ocurrió en el presente caso”.*

**Tercero:** Que, del mérito de la causal de nulidad invocada, aparece que lo denunciado por el recurso es la incorporación al juicio oral de una prueba, cuya materialidad se obtuvo con posterioridad al cierre de la investigación, elemento de convicción que fue, en definitiva, admitido en el auto de apertura, incorporado en la audiencia de juicio oral y valorado positivamente por parte de los sentenciadores del fondo.

**Cuarto:** Que, al respecto, esta Corte ya ha señalado que es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República, el que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el artículo 19, N° 3°, inciso sexto, de la Carta Fundamental, confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías



de un procedimiento racional y justo. En torno a los tópicos que contempla el derecho al debido proceso, este Máximo Tribunal ha sostenido que, a lo menos, lo constituye un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes que entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que se dicten veredictos motivados o fundados, etcétera.

Así, entonces, no hay discrepancias en aceptar que, sin duda, el derecho al debido proceso está integrado por la obligación de respetar los procedimientos fijados en la ley, desde que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la comunidad en el esclarecimiento de los sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente, de acuerdo a una serie de actos de carácter formal y preestablecidos, que den garantías del respeto de la presunción de inocencia, la independencia del tribunal, la igualdad entre las partes y la protección de los intereses del afectado. Este interés debe ser tutelado por el Ministerio Público como órgano predispuesto por el Estado precisamente con ese propósito, que incluye por cierto la promoción de la acción penal y la carga de probar la culpabilidad del inculcado, al mismo tiempo que el tribunal debe actuar con neutralidad y objetividad, de manera que no abandone su posición equidistante de las partes y desinteresada respecto del objeto de la causa.

**Quinto:** Que, por otra parte, los elementos del debido proceso también han sido desarrollados mediante la incorporación al procedimiento de una serie de resguardos tendientes a garantizar que el imputado goce, desde el



momento en que se le atribuya participación en un hecho punible, de una serie de derechos que materialicen el respeto de la presunción de inocencia que lo ampara y la igualdad de armas, entre los cuales se encuentra el ser oído, que supone el derecho a conocer el contenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan para ejercer adecuadamente su derecho a defenderse de todos los hechos y circunstancias que se le imputan y formular los planteamientos y alegaciones que convengan a su defensa, el derecho a controlar y controvertir la prueba de cargo, a probar los hechos que él invoca, y la prohibición de ser sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la formalización y en la acusación, aspectos —entre otros— que han sido consagrados en los artículos 8°, 93, 229, 259, 270 y 341 del código adjetivo.

**Sexto:** Que, en relación con el agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte ha resuelto, uniformemente, que su agravio debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso.

Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (entre otras, SCS N°s 2.866-2013, de 17 de junio de 2013; 4.909-2013, de 17 de septiembre de 2013; 21.408-2014, de 8 de septiembre de 2014; 4.269-2019, de 25 de marzo de 2019; 76.689-2020, de



25 de agosto de 2020; 92.059-2020, de 8 de septiembre de 2020; y, 112.392-2020, de 3 de noviembre de 2020).

Que, en este entendido, para la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal.

**Séptimo:** Que, sin embargo, la incorporación del peritaje respecto al alcaide incriminado no puede catalogarse como una infracción “sustancial” a una garantía constitucional, en este caso, del debido proceso, desde que no afectó el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado.

En efecto, como explica el propio recurso, si bien el plazo de investigación fue declarado cerrado en audiencia de 19 de febrero del 2024, el peritaje fue solicitado dentro de plazo, asignándose perito el 28 de febrero de 2024, esto es, dentro del plazo que tiene el Ministerio Público para formular acusación, siendo incluido en el libelo acusatorio y, por ende, era conocido de antemano su ofrecimiento como prueba para el juicio oral, por la defensa. Es decir, no se trata de la incorporación de una prueba solicitada con posterioridad al cierre de la investigación, máxime si al momento de verificarse la audiencia de preparación de juicio oral el 1 de abril de 2024, el texto del peritaje ya se encontraba en conocimiento de los intervinientes con casi un mes de antelación, teniendo en consideración, además, que la teoría de la defensa no transitó por cuestionar la naturaleza de la sustancia incriminada, razón por la cual la causal en estudio no podrá prosperar.

**Octavo:** Que, con relación a la causal de nulidad promovida por la defensa en carácter subsidiario, que la hace consistir en la vulneración a los





límites que impone la sana crítica en la ponderación de la evidencia, acorde a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, esta Corte ya ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en los que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable.

El cumplimiento del deber de motivación del fallo del tribunal de mérito significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino, además, a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo (entre otras, SCS N° 92.094-2020, de 14 de septiembre de 2020). La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales.

Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser corolario de la estimación racional de las probanzas y antecedentes aportados en el juicio oral, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera —y no de otra—, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Tal comprensión se ajusta a la concepción racionalista o cognoscitivista, que entiende la valoración de la prueba como el proceso de determinación de



la verdad o falsedad de las proposiciones sobre hechos conforme a las relaciones inferenciales que existen entre ellas y las pruebas disponibles (Cortés-Monroy, Jorge. “La valoración negativa como exclusión de la prueba ilícita en el juicio oral”, en *Ius et Praxis*, v. 24, N° 1, 2018, p. 663).

**Noveno:** Que, en este entendido, cabe destacar que la causal subsidiaria en estudio, invocada por la defensa, faculta al tribunal que conoce del recurso de nulidad para controlar si los jueces del grado, al valorar libremente las probanzas aportadas por los intervinientes, han contradicho los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Es decir, debe cautelar que en el proceso de apreciación y valoración probatoria —efectuado por el tribunal del grado conforme a las reglas de la sana crítica—, no se sobrepasen los parámetros de ponderación que son inherentes a dichas reglas, no siendo suficiente, en consecuencia, para anular un razonamiento, el sólo hecho de disentir del mismo.

Conforme a lo anterior, en el conocimiento del recurso de marras queda vedado en sede de nulidad efectuar una nueva valoración de los medios de prueba, facultad que se encuentra radicada, exclusivamente, en el tribunal de la instancia.

**Décimo:** Que, lo reprochado en este capítulo por la articulista, es tan sólo una reiteración de lo argumentado a través de la causal propuesta a título principal en su libelo recursivo, bastando lo dicho *ut supra* para evidenciar que, en su incorporación, no se verificó el reproche propugnado por la defensa.

**Undécimo:** Que, en efecto, sobre el tenor del recurso puede concluirse que lo que se intenta impugnar es la valoración de la prueba que hizo el tribunal y en base a la cual fijó los hechos conforme a los cuales calificó la



participación del acusado en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, lo cual escapa del control de esta Corte en un recurso de derecho estricto, razón por la cual el motivo absoluto de nulidad en estudio deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por la defensa de Andrés Antonio Calderón Marabolí, en contra de la sentencia definitiva de diez de junio de dos mil veinticuatro, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca y en contra del juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 2.300.940.662-K, RIT 136-2024, los que, por consiguiente, **no son nulos**.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro (S) Sr. Gómez.

**Nº 40.944-2024.**

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., los Ministros Suplentes Sr. Mario Gómez M., Sra. Dobra Lusic N., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Raúl Fuentes M. No firma la Ministra Suplente Sra. Lusic, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su periodo de suplencia.





En Santiago, a catorce de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

